

**REPÚBLICA DE COLOMBIA**



**SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL**

Medellín, dieciocho (18) de abril de dos mil veinticuatro (2024)

En el proceso ordinario laboral promovido por NELSON ARTURO AGUDELO VÁSQUEZ contra JIMÉNEZ BERMÚDEZ OCHOA & CIA SAS PANIFICADORA EL PARAISO y al cual fue integrado COLPENSIONES, en calidad de litisconsorte necesario por pasiva, procede la SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL a estudiar la viabilidad de conceder el recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la parte DEMANDANTE.

Pretende la parte actora que se declare que la demandada, cotizó en forma deficitaria para los riesgos de invalidez, vejez y muerte durante la vigencia del contrato de trabajo y de la misma forma, pagó las prestaciones sociales y vacaciones con base en un salario inferior al realmente devengado. En consecuencia, solicita que se condene al pago de los salarios causados entre el 7 de agosto y el 30 de septiembre de 2016 de conformidad con el art. 140 del CST, el reajuste salarial del lapso comprendido entre el 1° de octubre de 2016 y el 26 de febrero de 2017, el reajuste de las cesantías, de los intereses a las cesantías, de las primas de servicios y de las vacaciones con base en los salarios realmente devengados durante toda la vigencia de la relación laboral, el pago con destino a Colpensiones de los aportes para los riesgos de IVM dejados de cancelar entre el 13 de marzo y agosto de 1996 y de los aportes reajustados de toda la vigencia del contrato con el salario realmente devengado junto con los intereses moratorios por el pago deficitario de tales aportes; pidió que se ordenen las indemnizaciones de los arts. 64 y 65 del CST (la primera por despido indirecto), y del art. 99 de la Ley

50 de 1990, más los intereses legales sobre las sumas adeudadas o en forma subsidiaria la indexación.

El Juzgado Primero Laboral del Circuito de Medellín, Declaró que entre el demandante y la panificadora demandada existió una relación laboral desde el 13 de marzo de 1996 hasta el 21 de septiembre de 2017, la cual terminó por causa imputable a la empleadora; CONDENANDO a la panificadora al pago de \$211.315 por concepto de diferencias salariales causadas entre octubre de 2016 y febrero de 2017, más \$4.204.987 por concepto de indemnización por terminación del contrato, sumas que deberán ser indexadas al momento del pago; adicionalmente le ordenó que en un término no mayor a 20 días proceda a solicitar ante Colpensiones el cálculo actuarial correspondiente al período comprendido entre el 13 de marzo y el 31 de julio de 1996 con el IBC de 1 SMLMV, y que una vez emitido el mismo, proceda a pagarlo en los términos que indique dicha entidad. Por otra parte, ordenó a Colpensiones que una vez reciba la solicitud correspondiente por parte de la empleadora, proceda a efectuar el cálculo actuarial y emita el comprobante de pago dentro de un tiempo que no podrá exceder de 30 días; declaró no probada la excepción de prescripción y probada la de buena fe; condenó en costas a la panificadora en favor del demandante.

Por apelación de las partes, mediante providencia proferida el 15 de diciembre de 2023 se MODIFICÓ parcialmente el numeral segundo de la sentencia de primera instancia, en el sentido de condenar a Jiménez Bermúdez Ochoa & Cia SAS Panificadora El Paraíso a pagar al demandante la suma de \$4.335.488,30 por concepto de indemnización por despido indirecto, y CONFIRMÓ en lo demás la sentencia apelada. No impuso costas en esta instancia.

De conformidad con el artículo 86 del Código Procesal del trabajo y de la Seguridad Social, se tiene que el recurso procede en los procesos ordinarios laborales cuando la cuantía del interés jurídico económico sea superior a ciento veinte (120) veces el salario mínimo mensual legal vigente, es decir, \$139.200.000, para el año 2023.

Lo que determina la viabilidad del recurso de casación en materia laboral, por el aspecto cuantitativo, es la cuantía del interés para recurrir que está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada que, tratándose del demandado, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, en el monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por el fallo que se intenta recurrir, en ambos casos, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado.

En el caso concreto, se circunscribe entonces el interés jurídico económico de la parte demandante, en las pretensiones incoadas en el libelo demandatorio dejadas de reconocer en ambas instancias, que fueron objeto de apelación, relacionadas con la diferencia entre la indemnización del Art. 64 del C.S.T., ordenada (\$4.335.488) y la pedida (\$9.744.763) = **\$5.409.275**; reajustes de prestaciones y de aportes a seguridad social durante toda la vigencia laboral, respecto de lo cual, una vez revisado el expediente, se evidencia que no hay manera de cuantificarlos, toda vez que no se relacionaron los salarios que se aduce fueron efectivamente devengados durante la vigencia del vínculo, ni no obra prueba en el proceso, ni se cuenta con los **elementos necesarios** para determinar su valor, para efectos de establecer el reajuste de las cotizaciones pretendido.

Además de lo anterior, también comprende los salarios y prestaciones insolutas del 7 de agosto al 30 de septiembre de 2016, por valor de **\$3.298.633** e indemnización moratoria del art.65 del CST, por el no pago de prestaciones sociales, calculada como lo establece la norma: entre el 22 de septiembre de 2017 al 21 de septiembre de 2019, a razón de un salario diario de \$50.491 (salario devengado para el 2016), que arroja la suma de \$36.677.520, y los intereses moratorios desde el 22 de septiembre de 2019 hasta la fecha de la sentencia 15 de diciembre de 2023, teniendo en cuenta la tasa máxima bancaria diaria para el trimestre en curso (0.0885383) y el capital adeudado por concepto de prestaciones sociales, (\$211.315 + 3.298.633), que arroja la suma de \$4.801.318; para un total de **\$41.478.838**.

De este modo, teniendo en cuenta los valores enunciados, se tiene que suman un total de **\$50.186.746**, evidenciándose que tal cifra no supera la cuantía de 120 SMLMV, exigida para efectos de recurrir en casación.

Lo anterior indica que no acredita la parte demandante el interés jurídico económico para que el proceso sea revisado por la Honorable Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral de Casación.

En armonía con lo expuesto, el Tribunal Superior de Medellín, SALA QUINTA DE DECISIÓN LABORAL, NO CONCEDE, el recurso de casación interpuesto por el demandante contra el fallo proferido por esta Corporación.

Lo resuelto se ordena notificar en anotación por ESTADOS.

Los magistrados,

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

**LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**  
Magistrada ponente



**SANDRA MARÍA ROJAS MANRIQUE**  
Magistrada



**DIEGO FERNANDO SALAS RONDÓN**  
Magistrado

Firmado Por:  
Luz Patricia Quintero Calle  
Magistrada  
Sala 017 Laboral  
Tribunal Superior De Medellin - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,  
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **c40d5ba16c26a0e8ca03c47169c81361738c8b4c966a47c508a8fac7e03a4cd7**

Documento generado en 18/04/2024 05:01:31 p. m.

**Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:**  
**<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>**